

CURSO: CRITERIOS INTERPRETATIVOS EN MATERIA DE
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD Y MEDIDAS DE APOYO

**MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
EN EL ÁMBITO PERSONAL.
ASPECTOS CONTRADICTORIOS
ENTRE LA TUTELA, CURATELA Y UN
SISTEMA DE APOYOS FLEXIBLES**

I.- La Convención de la ONU, “Sobre los derechos de las personas con discapacidad”, nos introduce en primer lugar, en una “nueva forma de pensar sobre la discapacidad”, que por el cambio de paradigma que representa y sus efectos en las personas con discapacidad y sus apoyos, a los que se dirige; debe necesariamente hacernos reflexionar, serena pero firmemente, en qué medida la Convención ha venido a incidir en nuestro derecho interno, y cuál debe ser nuestra posición, cuando su aplicación, pueda provocar una colisión normativa.

Esta “Nueva forma de pensar sobre la discapacidad”, incide en lo que aquí nos ocupa, en los aspectos siguientes:

- Principios base de la Convención: Igualdad. Accesibilidad. Vida independiente.
- Nuevo concepto de la discapacidad.
- Una nueva visión de la persona con discapacidad.
- Un nuevo modelo de apoyo en la toma de decisiones.
- Mantenimiento del sistema de garantías.
- Movimientos de auto apoyo.

Consecuencias:

- La aplicación e interpretación de las normas sobre derechos de las PCD, se hará desde la perspectiva de los derechos humanos. (P. art 1, p.1)
- La clave la hallamos en el art. 12, al establecer el sistema de apoyo en la toma de decisiones.
- El abandono, o paulatina superación del modelo de sustitución, conllevará la nueva creación de “formas de apoyo”, donde sin duda alguna, la figura del asistente y su regulación, adquiere una importancia trascendental.

En nuestro derecho ya se han dictado normas de derecho interno, como la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, donde se recogen como normas inspiradoras del texto, las Directrices de la Recomendación R (99) 4, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 28 de febrero de 1999, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pretendiendo armonizar las instituciones clásicas de la tutela o la curatela, con un modelo de protección paralelo, fundado en nuevos mecanismos aplicables a los casos en que la persona con discapacidad o sus familiares prefieren no promover la incapacitación.

Esta duplicidad de mecanismos de protección se fundamenta en el deber de respetar los derechos, voluntad y preferencias de la persona, y con los principios de proporcionalidad y de adaptación a las circunstancias de las medidas de protección, “como propugna **la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por el Estado español**”. En todo caso, las referencias del libro segundo a la

incapacitación y a la persona incapacitada se interpretarán conforme a ella, en el sentido menos restrictivo posible de la autonomía personal.

De este modo, las directrices de la Convención o conclusiones que podemos extraer **en materia de modificación de la capacidad y medidas de apoyo** se concretan de este modo:

A).- En los procesos de modificación de la capacidad de obrar a una persona, es preciso promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, adoptando para ello las medidas de apoyo o protección que sean necesarias.

B).- La dosis justa de Protección. Del apoyo complementario, al apoyo mas intenso, pero siempre desde las capacidades o habilidades naturales existentes.

C).- Es necesario introducir “de facto”, en el procedimiento de incapacitación la exigencia de que se especifique con claridad en la demanda cual es el motivo (necesidad, objetivo, problema) que ha llevado a interponerla.

D).- El la revisión periódica de la persona y de los apoyos deviene necesaria, abriéndose de forma efectiva el proceso de recuperación de la capacidad, como ineludible.

II.- LOS APOYOS EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

1.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN A LA CONVENCION

- Sentencia Nº: 282/2009
- Fecha Sentencia: 29/04/2009
- CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
- Recurso Nº: 1259/2006
- Ponente Excma. Sra. D^a.: Encarnación Roca Trías
- INCAPACIDAD. La interpretación de las normas vigentes a la luz de la Convención de Nueva York de 2006. La incapacitación no altera la titularidad de los derechos fundamentales, aunque si afecta a su ejercicio y se justifica por su finalidad protectora de la persona.

De la sentencia extraemos los aspectos más importantes:

- En principio, el Código Civil no sería contrario a los valores de la Convención porque la adopción de medidas específicas para este grupo de persona está justificado, dada la necesidad de protección de la persona por su falta de entendimiento y voluntad.
- La incapacitación total sólo deberá adoptarse cuando sea necesario para asegurar la adecuada protección de la persona del enfermo mental permanente, pero deberá determinar la extensión y límites de la medida y deberá ser siempre revisable”.

“Pero el problema que puede plantear la entrada en vigor de la Convención y la necesidad de interpretación conjunta de todo el ordenamiento jurídico a la luz de estos principios consiste en cómo integrar la protección debida con las situaciones en las que falta la capacidad para entender y querer. Y ello partiendo de una base indiscutible de acuerdo con la que la privación de todos o parte de los derechos que se ostentan como consecuencia de la cualidad de persona sólo puede adoptarse como un sistema de protección.

Para que funcionen los sistemas de protección se requiere que concurran algunos requisitos: la situación de falta de capacidad, entendida ésta en sentido jurídico, debe tener un carácter permanente, es decir que exista una estabilidad que influya sobre la idoneidad para la realización de una serie de actos, actividades y sobre todo, para desarrollar de forma adecuada y libre, la personalidad.

Esto comporta que puedan producirse a) una variedad de posibles hipótesis, caracterizadas por su origen y la diversidad de graduación y calidad de la insuficiencia psíquica, y b) La mayor o menor reversibilidad de la insuficiencia. Por ello hay que afirmar rotundamente que la incapacitación al igual que la minoría de edad no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio. De aquí, que debe evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado”.

“Debe ser positiva la respuesta a la pregunta de si está de acuerdo con los valores constitucionales una regulación específica de la situación jurídica del incapaz. Todas las personas, por el hecho del nacimiento, son titulares de derechos fundamentales con independencia de su estado de salud, física o psíquica. Los derechos reconocidos constitucionalmente se ostentan con independencia de las capacidades intelectivas del titular. Así el artículo 162 CC exceptúa de la representación de los padres “los actos relativos a los derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo” (un caso emblemático es el recogido en la STC 154/2002, de 18 julio sobre libertad religiosa del hijo menor de edad, aunque mayor de 14 años) y aunque el Art. 162 CC aparece referido sólo a menores, esta misma norma se aplicará cuando se prorrogue la patria potestad, al incapacitarse hijos mayores y, por su propia naturaleza, a los incapacitados, ya que la sentencia tiene contenido variable, según dispone el Art. 760.1 LEC y se establecía en el ahora derogado Art. 210 CC después de la reforma de 1983; también el Art. 209 del Código de Familia de Cataluña (ley 9/1998, de 15 julio) excluye de la representación los actos “relativos a los derechos de la personalidad, salvo que las leyes que lo regulen lo dispongan de otro modo” y ello tanto en lo que se refiere a la tutela de menores, como a la de los incapaces”.

- De este modo, sólo esta interpretación hace adecuada la regulación actual con la Convención, por lo que el sistema de protección establecido en el Código civil sigue vigente, aunque con la lectura que se propone:
- 1º Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. Esta es la única posible interpretación del artículo 200 CC y del artículo 760.1 LEC.
- 2º La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada.

2.- SENTENCIAS EN QUE SE APLICA LA CONVENCION, UTILIZANDO LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO INTERNO.

- SENTENCIA de veintisiete de abril de dos mil diez de la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº QUINCE de Las Palmas de Gran Canaria,
- Dña. Carmen María Simón Rodríguez..
- DERECHO DE SUFRAGIO
- CURADOR. (Ver Anexo.)

- Las sentencias que adoptan una forma intermedia, acudiendo a la institución de tutela parcial., como la S. de 13/10/09. J.1ª.I. Gijón. Nº 8. del Magistrado Ángel L. Campo.

III.- ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL.

En la Disposición Final Primera de la Ley 1/2009 de 25 de Marzo que modifica la ley de 8 de Junio de 1957 sobre el Registro Civil, se señala que “El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley..., se obliga a la reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para adaptarlos a la Convención de N.U.

Que se conozcan, únicamente se han elaborado los siguientes estudios al respecto:

- 1.- Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la Legislación a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Consejo de Ministros, 30 de marzo 2010. Conclusiones:

La legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE en esta materia. No obstante se detecta la necesidad de modificar determinadas normas.

- *“Borrador del anteproyecto de ley de reforma de las leyes de e. civil, hipotecaria, del código civil, del código de comercio y del estatuto orgánico del ministerio fiscal en materia de incapacitaciones y cargos tutelares”.*
(Curso de Zaragoza. Mayo 2010).

IV.- OTROS TRABAJOS Y PROPUESTAS.

1.- Asociación Aequitas : INFORME de las CONCLUSIONES LA CONVENCIÓN SOBRE LOS D. PCD., EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ESPAÑA.

Fundación Aequitas Ministerio de Justicia. 1 de junio de 2010. Madrid

2 .- Estudio de la Comisión de Expertos del Real Patronato de la discapacidad. Propuesta articulada de reforma del Código Civil y LEC. para la aplicación de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

V.- NUEVA LEGISLACIÓN EN ESTA MATERIA.

Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. (B O E. Núm. 203. Sábado 21 de agosto de 2010.

En la específica materia de los medios de apoyo, se configuran las instituciones de protección como un deber que, bajo el control de la autoridad judicial y vigilancia del M. Fiscal, debe ejercerse en interés de la persona protegida y de acuerdo con su personalidad, procurando que las decisiones que le afecten respondan a sus anhelos y expectativas, incorporando una gran variedad de instrumentos de protección, que pretenden cubrir las diversas situaciones en que pueden encontrarse las personas con discapacidad, incluyéndose la regulación de la asistencia y la protección patrimonial de personas discapacitadas y dependientes.

Respecto a **la tutela** se pretende un mayor reforzamiento de la autonomía de la persona mediante la regulación de los Poderes preventivos permitiéndose que, sin necesidad de constituir la tutela, el apoderado pueda continuar cuidando de los intereses de la persona que ya no puede valerse por sí misma¹. **“Se trata de que no**

¹ En todo caso, en interés de la persona protegida, puede finalmente constituirse la tutela y la autoridad judicial, si se lo solicita el tutor, pueda resolver la extinción del poder. Paralelamente, se han fijado unas cautelas para el otorgamiento de las escrituras que contienen la delación hecha por uno mismo, ya que se ha detectado que, con excesiva frecuencia, algunas escrituras de designación de tutor se otorgan justo antes de instar a la incapacitación, lo que hace sospechar que puede existir captación de la

siempre sean precisas la incapacitación y la constitución formal de la tutela, que se configura como una medida de protección, especialmente en casos de desamparo del incapaz, cuando a la grave enfermedad psíquica se le añade la falta, inadecuación o imposibilidad de apoyo familiar”.

Se descarta la tutela institucional del C. Civil del art. 239, manteniéndose el sistema actual de especialización de las entidades tutelares no lucrativas dedicadas a la protección de personas incapacitadas, permitiéndose que las personas jurídicas se excusen si no disponen de medios suficientes para desarrollar adecuadamente la tutela o si las condiciones personales del tutelado son ajenas a los fines para los que han sido creadas.

Es importante resaltar que “La autoridad judicial, para el seguimiento de la evolución y de las condiciones de vida de las personas y con relación a medidas de control de la gestión patrimonial, puede requerir la intervención de especialistas, que tienen la consideración de auxiliares de los tribunales”.

La nueva figura del apoderado o administrador. Artículo 222-2. 222-27.

Tomado de la legislación germana, se introduce este medio de apoyo, sustitutivo o en su caso complementario de la tutela, por el que mediante el otorgamiento de un “Poder en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad”, se nombre a **un apoderado** en escritura pública para que cuide de los intereses de las personas mayores de edad que, por causa de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico, no pueden gobernarse por sí mismas.

Como cautelas se establece que el poderdante puede ordenar que el poder produzca efectos desde el otorgamiento, o bien establecer las circunstancias que deben determinar el inicio de la eficacia del poder. En el primer caso, la pérdida sobrevenida de capacidad del poderdante no comporta la extinción del poder. El poderdante también puede fijar las medidas de control y las causas por las que se extingue el poder.

En cuanto a la distribución de funciones entre tutor y administrador., “si existe un administrador patrimonial, el tutor solo se ocupa del ámbito personal. Las decisiones que conciernan tanto al ámbito personal como al patrimonial deben tomarse conjuntamente”.

También se regula la resolución de los desacuerdos, o conflicto de intereses entre tutores y administradores.

Finalmente se contempla la creación de un consejo de tutela para la supervisión de su ejercicio.

voluntad por parte del designado o, simplemente, que el otorgante no era plenamente capaz. Por ello, por una parte, se consideran ineficaces las delaciones hechas por uno mismo si la escritura que las contiene se ha otorgado después de haberse instado el proceso sobre su capacidad o después de que el ministerio fiscal haya iniciado sus diligencias preparatorias; y por otra parte, se legitima a las personas llamadas por la ley para ejercer la tutela o al ministerio fiscal para oponerse judicialmente a la designación hecha por el mismo interesado dentro del año anterior al inicio del procedimiento sobre la capacidad.

La **curatela** se concibe como una institución complementaria de la capacidad en que es la persona protegida la que actúa por sí misma, se admite que en supuestos de incapacitación parcial la sentencia pueda conferir facultades de administración al curador, que, si es preciso, puede actuar como representante. Es por ello que se incluye también la obligación de rendir cuentas, propia de toda gestión de negocios ajenos.

El **defensor judicial**, se configura como institución tutelar que cumple una función de ajuste de las demás instituciones de protección, incluida la potestad parental.

En cuanto a **la guarda de hecho**, se vincula a los casos de cuidado del menor en situación de desamparo o de una persona mayor de edad en quien se da una causa de incapacitación, supuesto en el que se impone la obligación de comunicar el hecho de la guarda a la autoridad judicial cuando la persona está en un establecimiento residencial, sin perjuicio de lo establecido por la legislación procesal.

En la práctica se ha podido constatar que son excepcionales, y más bien extremos, los casos en que las familias toman la decisión de solicitar la incapacitación de las personas ancianas afectadas de demencias seniles o de otras enfermedades que les impiden decidir por sí mismas. Por otra parte, cuando se ejerce la guarda de hecho de una persona que está en potestad parental o en tutela, también se ha considerado pertinente que la autoridad judicial pueda conferir funciones tutelares al guardador, si existen circunstancias, como por ejemplo la duración previsible de la guarda o las necesidades de la persona guardada, que lo hagan aconsejable. La atribución de funciones tutelares comporta la suspensión de la potestad o la tutela, y evita al guardador la carga, demasiado onerosa, sobre todo en un contexto familiar, de tener que instar a la privación de la potestad o la remoción del tutor.

Junto a la disposición que permite no constituir la tutela si se hubiese otorgado un poder en previsión de la pérdida de capacidad, los cambios en relación con la guarda de hecho son un reflejo del nuevo modelo de protección de la persona que diseña el libro segundo. Este modelo ha sido guiado por la idea de considerar que la incapacitación es un recurso demasiado drástico y, a veces, poco respetuoso de la capacidad natural de la persona protegida.

La novedad más importante en esta materia, la constituye una nueva forma de protección a través del “**asistente**”, que en la línea marcada por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y siguiendo las directrices de la Recomendación R (99) 4, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 28 de febrero de 1999, se establece como un mecanismo de protección, paralelo a la tutela o la curatela.

Se parte, de una concepción de la protección de la persona no vinculada a los casos de falta de capacidad, sino que incluye instrumentos que, basándose en el libre desarrollo de la personalidad, sirven para proteger a las personas en situaciones como la vejez, la enfermedad psíquica o la discapacidad. De este modo se incluye **la asistencia** como nuevo instrumento de protección para el mayor de edad que lo

necesita para cuidar de su persona o de sus bienes debido a la disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas.

También puede ser útil, también, para aquellos colectivos especialmente vulnerables pero para los cuales la incapacitación y la aplicación de un régimen de tutela o curatela resultan desproporcionadas, como las personas afectadas por un retraso mental leve u otras para las que, por el tipo de disminución que sufren, los instrumentos tradicionales no son apropiados para atender a sus necesidades

El capítulo VII regula la figura del **patrimonio protegido**, integrado por los bienes y su rendimientos, que a título gratuito aporta el constituyente a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona afectada por discapacidad psíquica o física de una cierta gravedad o por una situación de dependencia igualmente severa.

Se fija con precisión una protección patrimonial a la persona beneficiaria, que parte de la idea que este patrimonio no responde de las obligaciones de la persona beneficiaria, ni tampoco de las de la persona constituyente o de quien hizo aportaciones, sino que únicamente queda vinculado por las obligaciones contraídas por el administrador para atender a las necesidades vitales de la persona protegida. Como complemento de esta figura, se diseña un régimen de administración del patrimonio protegido y de supervisión de la actividad del administrador y la disposición adicional primera regula, también, la creación del Registro de patrimonios protegidos.

VI.- ESPECIALIZACIÓN: ÓRGANOS, JUECES, FISCALES, PERSONAL JUDICIAL. COLABORADORES NECESARIOS. DIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TUTELA JUDICIAL EN ESTE ÁMBITO.

- La Convención, art 13.2., considera otro apoyo básico: el acceso de las PCD., a la justicia.
- Juzgados especializados. 1º y 2ª Instancia
- Juzgados encargados.
- Medios y recursos. Optimización. Dignificación de nuestra función.
- Guía de buenas prácticas.
- Formación: Inicial y Continuada.
- Formación de una Red informática de apoyo.

VII.- SITUACIÓN ACTUAL Y PRONÓSTICO DE FUTURO. AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN.

Como hemos visto anteriormente, la tutela judicial efectiva que se debe prestar a las PCD, gira necesariamente sobre el concepto de “protección”.

Pero, ¿Qué es proteger según la Convención?

Todo sistema de protección deberá:

- GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS de las PCD.
- NO HACER JUSTICIA DEFENSIVA.
- ESTABLECER LA DOSIS JUSTA DE APOYO.
- CONTROL EFECTIVO DEL APOYO, PARA ADAPTARLO A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LAS PCD.

¿Como estamos controlando las tutelas en la actualidad?...

A).- Instrucción nº 4/2008, 30-7-2008, sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces.

CONCLUSIONES.

Primera.- Los Sres. Fiscales darán cumplida observancia a la Circular 2/84 y a las Instrucciones 6/1987 y 3/1990 de la Fiscalía General del Estado, las cuales mantienen su vigencia en los ámbitos que en las mismas se contempla.

Segunda.- Los Sres. Fiscales Jefes Provinciales, mediante la utilización del programa informático facilitado por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por la Comunidad Autónoma correspondiente, establecerán una base de almacenamiento de datos, en la que han de registrarse, para su constancia en la misma, todas las Diligencias Preprocesales y de los procedimientos judiciales relativos a las tutelas de las personas con discapacidad, con expresión en el mismo de todos los extremos expresados en el cuerpo de la presente Instrucción.

Tercera.- Los Sres. Fiscales Jefes Provinciales cuidarán que en la constitución y desarrollo de dicha base informática de almacenamiento de datos, se observe lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

Cuarta.- Los Sres. Fiscales revisarán cada seis meses la efectiva actualización de dicha base de datos.

Quinta.- Los Sres. Fiscales realizarán un efectivo control sobre el cumplimiento de los requisitos legales relativos a la delación de la tutela, nombramiento de tutor, ejercicio y extinción de dicho cargo, mediante la vigilancia de los procedimientos judiciales de tutelas.

Sexta.- Cuando se planteen cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales por razón del cambio residencia de una persona sometida a tutela, los Sres. Fiscales, de acuerdo con la más reciente doctrina jurisprudencial, y atendiendo a razones de inmediación, eficacia y efectividad, informarán a favor de atribuir la competencia al juzgado del lugar de residencia actual de la persona con discapacidad.

Séptima.- Los Sres. Fiscales solicitarán anualmente de los Juzgados correspondientes, que se requiera a todos los tutores para que informen de forma amplia y razonada sobre la situación de las personas con discapacidad, así como sobre su patrimonio, procurando adecuar los dictámenes e informes al contenido de la presente Instrucción.

B).- Problemas que se suscitan en el control y vigilancia de las tutelas:

- La revisión de las tutelas. Problemas prácticos y D. Transitorio.

- Derechos que pueden ejercitarse y desarrollarse tras la incapacitación... derecho al voto, uso de dinero de bolsillo, perspectivas de vida independiente, etc...

- La tutela institucional o automática, para personas con discapacidad en situación de desprotección, será una de las cuestiones mas trascendentes, pues en la práctica cada vez con mas frecuencia, ante la ausencia de apoyos próximos y familiares, se debe recurrir al apoyo de protección institucional. El control y vigilancia del mismo debe necesariamente protocolizarse.

C).- La autorización judicial en los internamientos residenciales.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°6 de BARACALDO. AUTO N° 679/10, de fecha 22 de junio de 2010. (Ver Anexo).

VIII.- SOBRE LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS.

Entre otras cuestiones

- Citar en las resoluciones los principios de la Convención aplicables al caso.

- Utilización en lo posible de la terminología de la Convención.

- Toda restricción de la capacidad de obrar, debe ser interpretada de forma restrictiva.

- La discapacidad sólo puede ser causa de modificación de la capacidad de obrar, si impide a la persona autogobernarse.

- La inaptitud para el autogobierno es circunstancial y para su determinación, habrá que averiguar lo que hace ordinariamente la persona con discapacidad, lo que necesita hacer y lo que no puede hacer por sí misma;

- Si resulta que la persona con discapacidad necesita hacer o procurarse algo que no puede hacer o procurarse por sí misma, ésta será el área de falta de autogobierno que ha de ser complementada por la particular figura o la medida de apoyo.

ANEXOS.

LA CUESTIÓN ESTADÍSTICA.

SENTENCIA de veintisiete de abril de dos mil diez

Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº QUINCE de Las Palmas de Gran Canaria, juicio verbal de incapacidad Nº 678/09

AUTO Nº 679/10 de 22 de junio de 2010

INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6/ LEHEN AUZIALDIKO 6 ZK.KO EPAITEGIA BARAKALDO (BIZKAIA) .

LA CUESTIÓN ESTADÍSTICA.

Memoria F.G.E.	En 2007
• Diligencias prejudiciales. (art 5 EOMF.)	23.440
• P. de M de capacidad	22.708 (F. 13.012.)
• Tutelas	23.445
• Internamientos	33.703.
Memoria F.G.E.	En 2008
• Diligencias prejudiciales. (art 5 EOMF)	28.113
• P. de M de capacidad	24.193 (F. 16.299)
• Tutelas	28.245
• Internamientos	46.002
Memoria FGE.(2010).	En 2009
DILIGENCIAS INFORMATIVAS	24.231
DEMANDAS PRESENTADAS POR EL FISCAL	16. 395
DEMANDAS instadas por PARTICULARES	8.879
Sentencias estimatorias dictadas	12.668
Sentencias desestimatorias	197
EXPEDIENTES DE TUTELA Y CURATELA	10.726
Dictaminados en el año	26.058

EXPEDIENTES DE PROTECCION PATRIMONIAL (LEY 41/03)

Incoaciones a instancia del Fiscal	16
Incoaciones a instancia de particulares	5

EXPEDIENTES DE INTERNAMIENTO **45.422**

EXPEDIENTES SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS **99**

Fuente: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Año 2009

Proc capacidad. 23.935

Internamientos. 47.957

SENTENCIA

En las Palmas de Gran Canaria a veintisiete de abril de dos mil diez

istos por Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº QUINCE de Las Palmas de Gran Canaria, los presentes autos civiles de juicio verbal de incapacidad Nº 678/09 seguidos a instancia de DON JOSE ..y DOÑA MARIA..., representados por la Procuradora doña María del Carmen..., bajo la dirección legal de don José Luis., contra DOÑA TERESITAen situación procesal de rebeldía y con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 20 de noviembre de 2009, se repartió a este juzgado demanda de juicio verbal, presentada por la representación procesal de DON JOSE y DOÑA MARIA DE LOS ANGELES contra DOÑA TERESITA en la cual tras la alegación de los hechos y fundamentos de derechos que se estimaron de aplicación se terminó suplicando que se dictara sentencia declarando la incapacidad de la demandada y el nombramiento como tutor a don Octavio.

SEGUNDO.- Siendo competente este juzgado para el conocimiento de la demanda

planteada por auto de fecha de 9 de diciembre pasado se admitió a trámite la misma, con emplazamiento de la demandada y del Ministerio Fiscal. Asimismo se acordó la práctica de prueba anticipada consistente en el examen del presunto incapaz y el reconocimiento personal por la proveyente.

Con fecha de 14 de diciembre pasado, contestó el Ministerio Fiscal. Por su parte la demandada, presunta incapaz no contesto a la demanda por lo que mediante providencia de fecha de 3 de marzo del corriente se declaró su rebeldía procesal y se citó a las partes en legal forma para la celebración del preceptivo juicio verbal.

TERCERO.- Llegado el día y hora señalada para el acto del juicio compareció la actora, así como el Ministerio Fiscal.

Concedida la palabra a la parte actora se ratificó en las alegaciones de la demanda. Por su parte el Ministerio Fiscal se ratificó en su escrito de contestación.

Practicada la prueba propuesta y declarada pertinente, se concedió la palabra a las partes para conclusiones y una vez verificado se dio por terminado el acto.

CUARTO.- En la tramitación del presente juicio se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, lleva implícito el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo puede acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley (artículo 199 del Código Civil), mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites o diligencias, que en la actualidad de imponen en el vigente artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Sentencia T.C. 9 de octubre de 2002).

En este sentido el art. 199 del Código Civil señala que nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley, y en el artículo 200 configura como causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. De este último precepto se desprende que lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad, sino sufrir una perturbación que sea origen de un estado mental propio con repercusiones jurídicas; tal estado mental viene caracterizado por los siguientes elementos: a) la existencia de un trastorno mental cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); b) la permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico), y c) que, como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o, en palabras del Código Civil, de gobernarse por sí mismo (criterio jurídico), debiendo interpretarse tal expresión, no en un sentido absoluto de imposibilidad total, plena y completa, sino bastando que la enfermedad o deficiencia mental implique una restricción grave del autogobierno.

Asimismo el artículo 215 del mismo cuerpo legal, teniendo en cuenta que aquellas enfermedades o deficiencias pueden originar trastornos de muy diferente intensidad a los que como es lógico deben darse respuestas diferentes, establece que la guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los

menores o incapacitados se realizara , en los casos que proceda , mediante la tutela, la curatela y el defensor judicial. Por su parte el art 760 de la LEC establece que juez que declare la incapacidad está obligado a determinar la extensión y límites de esta, así como el régimen de tutela o de guarda a que ha de quedar sometido el incapaz.

SEGUNDO.- La anterior regulación sustantiva y procesal, debe interpretarse en la actualidad a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 6 de diciembre de 2006, ratificado por Instrumento de ratificación de la Jefatura del Estado española y publicado en el BOE de 21 de abril de 2008. El texto está integrado por 50 artículos que vienen a establecer los principios, valores y mandatos que deben prevalecer en el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad, y que deben observar los países que ratifiquen el tratado, resultando definido su objetivo en el artículo 1 como el de “... *promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente*”

El artículo 3 señala como principios de la Convención, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas entre otras.

Finalmente y por la especial trascendencia que en relación al proceso que nos ocupa presenta, debe mencionarse el artículo 12 que bajo la rubrica “Igual reconocimiento como persona ante la ley”, establece:1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

Se infiere así del citado artículo 12, que se establece un cambio fundamental en la manera de abordar la cuestión de la capacidad jurídica en aquellas situaciones en las que una persona con discapacidad puede necesitar la ayuda de un tercero. Este cambio puede ser denominado como el paso del modelo de “sustitución en la toma de decisiones” al modelo de “apoyo o asistencia en la toma de decisiones”, de modo que la incapacidad absoluta debe dejar de ser la regla general y pasar a ser excepcional. Por consiguiente, en los procesos en que se solicite modificar o privar de la capacidad de obrar a una persona, es preciso promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, adoptando para ello las medidas de apoyo o protección que sean necesarias.

Por otra parte, para determinar si procede o no modificar la capacidad de una persona, y en su caso que alcance debe tener esa modificación y que medida de protección o de apoyo es preciso adoptar, se debe tomar en consideración una serie de

circunstancias básicas, a saber, conocer cuales son las condiciones de vida y actividades que puede hacer la persona afectada por el procedimiento; que necesita realmente esa persona para poder ejercer con la máxima plenitud posible, su capacidad jurídica; en que va a beneficiar realmente la sentencia que se dicte a sus condiciones de vida, debiendo tenerse en cuenta finalmente, que todas las personas tenemos diversas habilidades funcionales, que afectan a diversas esferas de la vida : a) habilidades funcionales de la vida cotidiana, es decir actividades que puede hacer una persona a diario: vestirse, asearse, usar medios de comunicación, cocinar, limpiar etc.; b) habilidades de índole patrimonial, es decir todas aquellas actividades relacionadas con su patrimonio; control de cuentas bancarias, manejo del dinero de bolsillo, realización de contratos, prestamos etc., c) habilidades de índole sanitario, es decir posibilidad de tomar decisiones en relación a tratamiento médicos quirúrgicos, farmacológicos, rehabilitadores etc. y d) habilidades de índole social, es decir si puede deambular sola por la calle, usar medios de transporte publico, decidir sobre su lugar de residencia etc.

Es por ello que valorando todas las circunstancias, la sentencia que se dicte a modo de traje a medida o un vestido único para esa persona, tendrá que ajustarse a sus necesidades, de tal forma que la incapacidad que se pida y la que se conceda, se acomode perfectamente solo y exclusivamente a ella, en cuanto que, cada discapaz, necesita su especial medida de protección.

TERCERO.- Partiendo de las anteriores consideraciones y, centrándonos en el caso particular de doña Teresita, tras valorar las pruebas practicadas en especial el informe médico y resto de la documental aportada con la demanda, el informe médico forense, la audiencia de parientes y la exploración personal por esta juzgadora, se aprecia que la demandada que cuenta en la actualidad con 30 años y, tiene reconocido administrativamente un grado de minusvalía psíquica de 65%, padece Esquizofrenia paranoide, desde el año 1.996 con tratamiento y controles periódicos, encontrándose en la actualidad estabilizada psicopatológicamente.

La patología señalada, conforma resulta de los medios de prueba anteriores, afectan a la capacidad de obrar y habilidades funcionales de doña Teresita de la siguiente manera. En cuanto a las habilidades para la vida independiente y de índole social, ningún déficit se apreció en la demandada en cuanto a los aspectos más básicos de la vida cotidiana, aseo, comer, deambular por la calle, usar el transporte, telefonar, respuesta ante la necesidad de ayuda, realizar pequeñas compras, incluso para desarrollar un trabajo remunerado, en este supuesto como operaria de jardinería para el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y; conducir vehículos de motor – dispone de carnet de conducir desde hace 12 años-. Por el contrario, si se aprecia déficit ante la posibilidad de vivir sola, cambiar su lugar de residencia o viajar al extranjero, por la negativa incidencia que ello pudiera conllevar en su patología.

En cuanto a sus habilidades sobre la salud, se apreció que la demandada tiene plena conciencia de su enfermedad, no obstante lo cual, si se comprobó cierta carencia en este aspecto, y más concretamente en el manejo de medicamentos pues precisa de la supervisión de sus familiares, también para asistir a los controles médicos a los que acude acompañada de sus progenitores, así como para poder otorgar un completo consentimiento informado para ser sometida a tratamiento medico, quirúrgico, rehabilitador, farmacológico, control y asistencia a citas medicas.

Finalmente en cuanto a sus habilidades económico-jurídico-administrativas, la propia demandada reconoce abiertamente que es en dicho ámbito donde necesita mayor asistencia. Doña Teresita reconoce la moneda de curso legal y su valor, puede manejar dinero de bolsillo, aunque admitió que a veces no es consciente de cual es su

límite a la hora de gastar. Igualmente se ha constatado que no esta en condiciones de tomar decisiones de contenido económico, como seguimiento efectivo de sus cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos etc, ni tampoco para realizar actuaciones complejas - préstamos, donaciones, cualesquiera actos de disposición patrimonial-, otorgar poderes a favor de terceros, hacer disposiciones testamentarias o entablar, por si sola, acciones judiciales.

Así las cosas, desde la situación fáctica comentada, de acuerdo con los razonamientos antes expuestos, no procede declarar la incapacidad total de la demandada tal y como y como se dejó interés en la demanda; antes bien lo procedente es modificar parcialmente la capacidad de obrar de doña Teresita, para actuar por si sola y de forma autónoma a la hora de tomar las decisiones, ya referidas: 1.- Toma de decisiones y otorgar consentimiento informado valido para cualquier intervención o tratamiento medico, con especial atención al tratamiento necesario para su esquizofrenia paranoide; 2.- Cambiar de domicilio o salir al extranjero; 3.- Realizar actuaciones complejas o de administración de su patrimonio, seguimiento efectivo de sus cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos etc. otorgar testamento y, otorgar consentimiento valido en contratos o negocios jurídicos que afecten a su persona o a su patrimonio u otorgar poderes a terceros y; 4.- No puede entablar acciones judiciales.

En cuanto al derecho de sufragio, cuya privación se interesó en la demanda, no resulta procedente. La interpretación de Ley General Electoral de acuerdo con el espíritu de la Convención, exige respetar, en la mayor medida posible, la autonomía y los derechos fundamentales de la persona con capacidad modificada, de modo que no podrá privarsele del derecho de sufragio activo con carácter general, salvo casos excepcionales, en cuanto que ello supondría un retroceso en la necesaria integración social que se propugna respecto . En el concreto supuesto enjuiciado no se ha acreditado esa especial incapacidad de doña Teresita para poder elegir una determinada opción y ejercitar su derecho al voto, pues dicho ejercicio solo requiere una manifestación de voluntad, para la que resulta necesaria no tanto un determinado nivel de raciocinio o de conocimiento, sino la expresión de una opinión o decisión personal sobre las diversas ofertas electorales, en función de la formación cultural de cada persona.

CUARTO.- Conforme dispone el art. 760 debe determinarse el régimen de protección a que debe quedar sometido la demandada así como la persona que, con arreglo a la ley, ha de asistirle en aquellos ámbitos en que presenta el déficit.

En atención a las circunstancias fácticas antes reseñadas, resulta procedente constituir en este supuesto un régimen de curatela, bastando la protección de apoyo en el ámbito en que realmente incide la deficiencia (STS 31-12-1991 y 30-06-2004).

Por lo que al curador se refiere, no suple la voluntad de la afectada, sino que la refuerza, controla y encauza, complementando su deficiente capacidad, por lo que su función no viene a ser de representación, sino de asistencia y protección en cuanto presta su apoyo e intervención para aquellos actos que haya de realizar la persona cuya capacidad queda modificada y estén especificados en la sentencia, los que no tienen que ser precisamente de naturaleza exclusivamente patrimonial.

En cuanto a la persona que ha de asumir dicho cargo, de las pruebas practicadas y las propuestas que hacen las partes incluido el Ministerio Fiscal para dicho cargo, procede acordar como medida de apoyo el nombrar como curador de doña Teresita, a don Octavio Naranjo González, quien asistirá a su hermana para aquellas actividades ya mencionadas, y en la que se aprecia su mayor déficit.

Aún cuando sería posible en este supuesto que dicha función fuera asumida por los actores, padres de la demandada y con quien esta convive, de modo similar a lo establecido en el artículo 171 del Código Civil -patria potestad rehabilitada- en atención a las circunstancias personales y de edad de los progenitores resulta aconsejable la designación como curador del antes citado don Octavio.

Esta función se ejercerá con sujeción a lo establecido en los artículos 259 y s. del Cc. y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificado por España en noviembre de 2007, y entrada en vigor en Mayo de 2008. En concreto y en aplicación del Art. 12 de la misma, **se recuerda al curador que entre sus obligaciones**, esta el intentar en la medida de lo posible que la demandada, vaya recuperando la misma, solicitando en su caso vía judicial su rehabilitación, total o parcial.

QUINTO.- En materia de costas no procede hacer especial declaración sobre las mismas de acuerdo con lo previsto en el art. 394 de la LEC.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de DON JOSE ...y DOÑA MARIA DE LOS ANGELES debo declarar que procede modificar la capacidad de obrar de DOÑA TERESITA –nacida el 3 de octubre de 1.979, inscrito su nacimiento en el Registro Civil de La Vega de San Mateo Tomo 53, folio 017, de la Sección 1ª- no tiene la suficiente capacidad de obrar y habilidades necesarias para actuar por si sola y prestar consentimiento valido en relación a los siguientes actos:

- 1.- Toma de decisiones y otorgar consentimiento informado valido para cualquier intervención o tratamiento medico, con especial atención al tratamiento necesario para su esquizofrenia .
- 2.- Cambiar de domicilio o salir al extranjero.
- 3.- Realizar actuaciones complejas o de administración de su patrimonio, otorgar testamento, otorgar consentimiento valido en contratos o negocios jurídicos que afecten a su persona o a su patrimonio. Si puede manejar dinero de bolsillo.
- 4.- No puede entablar acciones judiciales.

Se designa **CURADOR** de DOÑA TERESITA a su hermano DON OCTAVIO , que deberá asistir a DOÑA TERESITA para aquellas actividades ya mencionadas.

Firme que sea la presente sentencia, comuníquese de oficio al Registro Civil donde figure inscrito su nacimiento, a los efectos de extender la oportuna anotación marginal. Sin que haya lugar a realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Así por esta mi sentencia contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación y de la que se unirá certificación a las actuaciones quedando el original coleccionado en el libro de sentencias, la pronuncio mando y firmo .

AUTO N° 679/10 de fecha 22 de junio de 2010

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 6/ LEHEN AUZIALDIKO 6 ZK.KO
EPAITEGIA BARAKALDO (BIZKAIA).

Sobre/Gaia: INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO URGENTE

Demandante/Demandatzailea: FISCALIA PROVINCIAL DE BIZKAIA-SECCION
TERRITORIAL DE BARAKALDO Procurador/Prokuradorea:

Demandado/Demandatua: AVELINA ARRIBAS VARAS Procurador/Prokuradorea:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal solicitó por escrito de 2 de junio de 2010 incoación del correspondiente procedimiento de jurisdicción voluntaria para el ingreso en residencia de Da. Avelina .

SEGUNDO.- A la vista de la documental incorporada y ante la posible existencia de una causa de incapacitación, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal para que determine si concurre causa para iniciar demanda de incapacidad.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal informa que, en atención a las circunstancias, no solicita demanda de incapacidad; se da traslado al médico forense para que informe sobre la capacidad de Da. Avelina para decidir sobre su ingreso, si muestra oposición y la conveniencia del ingreso en atención a su posible situación de dependencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.. El Ministerio Fiscal solicita que, por procedimiento de jurisdicción voluntaria, se autorice judicialmente el ingreso en residencia de Da. Avelina.... Fundamenta la petición en el art 4.2 g) de la Ley de Dependencia, en atención a que, por su enfermedad, necesita ser atendida en un centro residencial adecuado.

SEGUNDO.- Tal y como recoge la exposición de motivos de la Ley 39/06, "el propio Texto Constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de Estado del bienestar se centraban, para todo ciudadano, en la protección sanitaria y de la Seguridad Social, el desarrollo social de nuestro país desde entonces ha venido a situar a un nivel de importancia fundamental a los servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, con colaboración especial del tercer sector, como cuarto pilar del sistema de bienestar, para la atención a las situaciones de dependencia".

A efectos de la presente Ley, según el art 2, se entiende por:

"I. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal

3. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas".

Conforme al art 4.g, las personas en situación de dependencia tienen derecho a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. En todo caso, según el párrafo 3º del precitado artículo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia.

TERCERO.- Según la documental procedente del Centro Residencial El Carmen, Da Avelina Arribas se muestra incontinente total, precisa ayuda en transferencias y silla de ruedas para la movilización; según el test de pfeiffer, deterioro cognitivo.

En el informe emitido por el médico forense, de 17 de junio de 2010, se concluye que Da Avelina....de 91 años de edad no presenta capacidad para decidir su ingreso en residencia y precisa ayuda de terceros para todas las actividades básicas de la vida diaria.

Si bien, tal y como se recoge en la Ley 39/06, toda persona dependiente tiene derecho a decidir sobre su ingreso, en los casos en que no tenga capacidad para tomar dicha decisión, serán los poderes públicos, concretados en la autoridad judicial, los que deban suplir esa falta de capacidad y velar por la atención de las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.

Considerando lo anterior, ante la necesidad de asistencia por terceras person~s para las actividades básicas de la vida diaria, se autoriza el ingreso en residencia de Da. Avelina .

PARTE DISPOSITIVA

Se autoriza el ingreso en residencia de Da. Avelina .

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia provincial de BIZKAIA (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna

(artículo 457.2 LECn).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 3532/0000/00/0045/10, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al preparar el recurso (DA 15a de la LOPJ) .

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.